

# REPÚBLICA DE COLOMBIA



## JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE FACATATIVÁ

Facatativá, diez (10) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

**Expediente:** 2019 00274  
**Convocante:** JOSE FERNANDO DIAZ MURILLO  
**Convocado:** CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA  
NACIONAL -CASUR

### NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

---

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la solicitud de acuerdo conciliatorio logrado entre el señor José Fernando Díaz Murillo y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR.

#### I. ANTECEDENTES

El señor José Fernando Díaz Murillo a través de apoderado judicial para el efecto presentó demanda en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, con el fin de que se le reconozca y pague la asignación de retiro.

Como fundamento de hecho de sus pretensiones indicó que mediante Resolución No. 2564 del 20 de abril de 2018, el Gobierno Nacional lo retira por voluntad propia.

Que, mediante derecho de petición dirigido al Director Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, radicado el día 16 de agosto de 2018, solicitó la asignación de retiro.

Mediante oficio E-00003-201826956-CASUR Id: 385278 del 13-12-2018 suscrito por el señor Brigadier General (r) en su calidad de Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, niega la asignación de retiro por no cumplir con requisitos.

Presentada la demanda fue admitida el 11 de diciembre de 2019, notificada a la entidad demandada, el día 11 de septiembre de 2020.

Que mediante escrito de contestación demanda, la entidad propuso su animo de conciliar de conformidad con el comité de conciliación, indicado reconocer y pagar la asignación de retiro del demandante.

#### II. EL ACUERDO CONCILIATORIO

La fórmula de arreglo propuesta por la entidad consistió en reconocer el 100% del capital y el 75% de la indexación, y cancelará dichas sumas dentro de los 6 meses siguientes a la radicación de la cuenta de cobro con los documentos pertinentes en la Entidad, sin pago alguno por concepto de intereses durante el referido plazo y aplicando la prescripción trienal contemplada en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.

De conformidad con la liquidación que anexó la parte convocada, los valores conciliados son los siguientes:

Valor de Capital Indexado	212.778.387
Valor Capital 100%	175.349.753
Valor Indexación	37.428.634
Valor Indexación por el (75%)	28.071.476
Valor Capital más (75%) de la Indexación	203.421.229
Menos descuento CASUR	-2.240.311
Menos descuento Sanidad	-7.303.014
VALOR A PAGAR	193.877.904

Propuesta que fue aceptada en su totalidad por el demandante.

### III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

#### 1. Marco normativo de la conciliación en asuntos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

En términos generales, es posible definir la conciliación como un mecanismo de autocomposición por cuya virtud los individuos y/o entidades buscan resolver conflictos de carácter jurídico, de manera anticipada, eficaz y pacífica, bien por el ejercicio de su propia voluntad o con la mediación de un tercero cuya imparcialidad permita el establecimiento de fórmulas de arreglo justas, con las cuáles no se vea afectado el orden público ni el interés general.

En lo Contencioso Administrativo, la conciliación extrajudicial tuvo sus orígenes en la Ley 23 de 1991, con el fin de promover la descongestión de los Despachos Judiciales, previendo en su artículo 59 la posibilidad de que las entidades públicas conciliaran de manera total o parcial, por medio de sus representantes legales, conflictos de contenido patrimonial y de carácter particular que debieran ventilarse ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a través de las acciones que traía el Código Contencioso Administrativo en sus artículos 85, 86 y 87.

Por su parte, el artículo 65 de la Ley 446 de 1998, determinó como asuntos conciliables aquellos que fueran susceptibles de transacción, desistimiento, y los que de manera expresa determinara la Ley, agregando el artículo siguiente que el acuerdo conciliatorio haría tránsito a cosa juzgada, y el acta respectiva prestaría mérito ejecutivo.

Es de anotar que, en vigencia de la Ley 446 de 1998 (art. 79), era facultad de los centros de conciliación autorizados por Ley la aprobación de los acuerdos conciliatorios en materia Contencioso Administrativa, siendo a su vez facultativa la intervención del Procurador Judicial en el trámite conciliatorio.

De igual forma, solo procedía la *homologación* judicial en el evento de no existir conformidad con el acuerdo celebrado.

A su vez, el artículo 80 *ibidem*, que modificó el artículo 60 de la Ley 23 de 1991, estableció el mecanismo de la CONCILIACIÓN PREJUDICIAL en materia contencioso administrativa, para ante el Ministerio Público, **como una posibilidad** previa a incoar las antes llamadas acciones (hoy medios de control) de: nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, que se encontraban desarrolladas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, respectivamente. Y se indicó además en artículo 81, que dicha conciliación tendría lugar únicamente cuando no procediera la “*vía gubernativa*” o cuando esta hubiere quedado agotada, y que no habría lugar a la conciliación en caso de haberse presentado la caducidad de la acción.

Al arribo de la Ley 641 de 2001<sup>1</sup> (art. 23), las conciliaciones extrajudiciales en lo contencioso administrativo, únicamente podían ser tramitadas ante

los agentes del Ministerio Público, y en punto a los asuntos objeto de conciliación, el artículo 19 *ibidem*, estableció que serían conciliables “(...) *todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación, ante los conciliadores de centros de conciliación, ante los servidores públicos facultados para conciliar a los que se refiere la presente ley y ante los notarios*”.

Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, que adicionó el artículo 42A a la Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia, estableció que en los asuntos que fueren conciliables, sería siempre requisito de procedibilidad adelantar la conciliación extrajudicial, para las acciones anteriormente mencionadas (las de los arts. 85, 86 y 87 del CCA).

La normativa actualmente vigente, esto es, **la Ley 2220 de 2022**, fijó unas normas especiales aplicables a la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo (TÍTULO V), definiéndola en su artículo 88, así:

*“La conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, autocompositivo, por medio del cual las partes, por conducto de apoderado, gestionan ante un agente del Ministerio Público neutral y calificado la solución de aquellas controversias cuyo conocimiento corresponda a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa.”*

De igual forma, el artículo 89 de la citada Ley, estableció la facultad de conciliar de manera total o parcial a las entidades Públicas, en todos los conflictos que pudieran ser de conocimiento de esta jurisdicción, siempre que la conciliación no estuviera expresamente prohibida, y sin que sea necesaria renuncia de derechos.

Se previó además que, en conflictos de naturaleza laboral y seguridad social, es posible la conciliación en tanto no se afecten derechos ciertos e indiscutibles. Y que, si existiere acto administrativo de carácter particular, es posible conciliar sobre sus efectos económicos, siempre que se presente alguna de las causales de revocación de los actos administrativos contempladas en el artículo 93 del CPACA, es decir: “1. *Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.* 2. *Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.* 3. *Cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona.*”

Además, en el artículo 90 de la Ley 2220 de 2022, quedaron definidos los asuntos no sucesibles de conciliación extrajudicial en material contencioso Administrativo, así:

- “1. Los que versen sobre conflictos de carácter tributario.*
- 2. Aquellos que deban ventilarse a través de los procesos ejecutivos de los contratos estatales.*
- 3. En los que haya caducado la acción.*
- 4. Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, y aún procedan recursos en el procedimiento administrativo o este no estuviere debidamente agotado.*
- 5. Cuando la Administración cuente con elementos de juicio para considerar que el lado administrativo ocurrió por medios fraudulentos.”*

Ahora bien, el artículo 91 de la referida Ley, creó unos principios especiales que, además de los contemplados el artículo 209 de la Constitución Política para la función administrativa (moralidad, igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, etc.), y los de gestión fiscal del artículo 267 Superior, orientarían la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, siendo tales **1) la salvaguarda del patrimonio público y el interés general, 2) La salvaguarda de y protección de los derechos ciertos e indiscutibles, y 3) la protección reforzada de la legalidad**, cuáles debería tener en cuenta el agente del Ministerio Público

en su labor conciliatoria, así como el Juez Administrativo en el estudio de aprobación o improbación del acuerdo conciliatorio, tal como quedó plasmado en el párrafo primero del citado artículo.

## 2. Control de legalidad

El Despacho considera que la conciliación se atiene a las disposiciones legales por cuanto las partes dentro del acuerdo conciliatorio son capaces por ministerio de la ley para disponer de sus derechos y contraer obligaciones, aunado a que estuvieron debidamente representadas para los fines pertinentes.

En efecto, la demandada por intermedio de su apoderada debidamente constituida y facultada para conciliar, al tiempo que el Comité de Conciliación de la entidad autorizó pactar como se establece en el anexo 39 del expediente digital,

El apoderado de la parte demandante aceptó la propuesta de conciliación visible en los anexos 27 y 28 del expediente digital.

En tal virtud, al efectuar el acuerdo, expresaron su voluntad libre de vicios, el objeto del acuerdo conciliatorio es lícito y la ley les ha autorizado dirimir sus conflictos sin necesidad de esperar la decisión de fondo proferida por la jurisdicción (art. 70, Ley 446 de 1998).

También advierte el Despacho que no se configuró la caducidad del medio de control por cuanto el asunto es relativo al reconocimiento y pago de una prestación periódica, como derecho cierto e irrenunciable, por lo que no opera el término de reclamar su derecho.

Por otra parte, se verifica que se trata de un conflicto susceptible de conciliación, atendiendo el estricto contenido patrimonial que comporta y que la ley entiende que cuando se concilia en asuntos en que medie un acto administrativo, éste se entiende revocado y sustituido por el acuerdo logrado (artículo 71 de la Ley 446 de 1998), por lo cual no existía impedimento legal para suscribir el acuerdo logrado entre las partes, aún en presencia de un acto administrativo expreso o ficto que hubiere negado el pretendido reconocimiento.

El Decreto 1211 del 8 de junio 1990, por la cual se reforma el estatuto de personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares expedido por el presidente de la república en uso de sus facultades extraordinarias que le confiere la Ley 66 de 1989, señaló:

*“ARTICULO 163. ASIGNACIÓN DE RETIRO. Durante la vigencia del presente estatuto, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Gobierno o de los de Comandos de Fuerza, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada, o por conducta deficiente, **y los que se retiren a solicitud propia** después de veinte (20) años de servicio, **tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se les pague una asignación mensual de retiro** equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 158 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto.*

*PARAGRAFO 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que durante la vigencia de este estatuto se retiren con treinta (30) o más años de*

*servicio, ser equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas en el artículo 158, liquidadas en la forma prevista en este mismo Decreto.*

*PARAGRAFO 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968, con treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación.*

*ARTICULO 164. TRES MESES DE ALTA. Los Oficiales y Suboficiales que sean pasados a la situación de retiro temporal o absoluto con quince (15) o más años de servicio o con derecho a pensión de invalidez, continuarán dados de alta en la respectiva Contaduría por tres (3) meses, a partir de la fecha que se cause la novedad de retiro, para la formación del correspondiente expediente de prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo 178 de este Decreto devengarán la totalidad de los haberes de actividad correspondientes a su grado. Tal período se considerar como de servicio activo, para efectos prestacionales.”*

En desarrollo de la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004, expidió el Decreto 4433 de 2004, por medio del cual fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.

Con posterioridad, el Decreto No. 1157 del 24 de junio de 2014, indicó en su artículo 1°:

**Artículo 1°. Asignación de retiro para el personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional en actividad.** *Fíjese el régimen de asignación mensual de retiro para el personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, **escalafonados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados del servicio activo después de quince (15) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad sicofísica, por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, según corresponda,** y los que se retiren a solicitud propia, o sean separados en forma absoluta, con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que se terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas computables de que trata el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, por los primeros quince (15) años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más, por cada año que exceda de los quince (15), hasta el ochenta y cinco por ciento (85%), incrementado en un dos por ciento (2%) por cada año adicional después de los veinticuatro (24) años de servicio, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.*

### **3. Análisis probatorio**

- Formato de hoja de servicio visible en el folio 21 del anexo 24 de la contestación de demanda, donde consta que prestó sus servicios por quince años cero meses y veinticuatro días (15 años 00 meses y 24 días).
- Que ingresó a la Policía Nacional en la categoría Nivel Ejecutivo.
- Que fue escalafonado de alumno a nivel ejecutivo el 10 de octubre de 2003.
- Que fue desvinculado de la institución por causal voluntad del Gobierno a partir del **10 de mayo de 2018.**

### **4. Control de lesividad**

Para el Despacho, el acuerdo conciliatorio puesto a consideración no puede ser calificado como lesivo al patrimonio estatal toda vez que por su



intermedio se está reconocido una asignación de retiro en los términos legales, citados anteriormente.

Ahora bien, es necesario precisar que aunque el derecho al reconocimiento de la pensión solicitada es imprescriptible, sí lo son las mesadas pensionales, es así como se tiene que el acto que negó el reconocimiento pensional fue del 13 de diciembre de 2018 (fl. 41 del anexo 05 del expediente digital), mientras que la demanda fue presentada el 18 de junio de 2019 (anexo 06), por lo que no operó el fenómeno de la prescripción trienal de las mesadas reclamadas.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Facatativá,

### RESUELVE

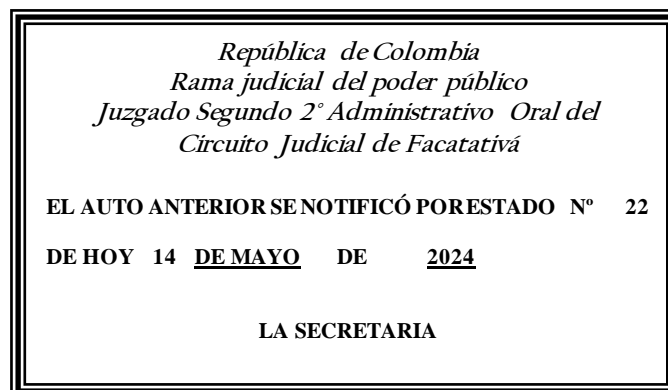
**PRIMERO. APROBAR** la conciliación judicial celebrada entre el Señor José Fernando Díaz Murillo y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

**SEGUNDO: NOTIFICAR** al agente del ministerio público lo decidido en la presente providencia, para lo de su competencia.

**TERCERO:** En firme este proveído, archívese la presente actuación previos los controles de rigor y de ser solicitado, devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**MARLA JULIETH JULIO IBARRA**  
**JUEZA**



Firmado Por:  
Marla Julieth Julio Ibarra  
Juez  
Juzgado Administrativo  
002  
Facatativa - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9cdbac69f68eab519b998d768ab5c07a78b5ca8a085e780cb1fb0cf689fe8a29**  
Documento generado en 10/05/2024 06:51:04 a. m.

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**